

COMPETENCIA

Seguida entre los CC. Jueces de Distrito de Puebla y de Instrucción de Tepeji de la Seda, en el mismo Estado, para no conocer de la causa iniciada contra D. Manuel Durán y Piña y Andres Avelino, por acusacion que contra ellos se ha hecho de los delitos de plagio y homicidio.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que D. Manuel Durán fué consignado al Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Gobernador del mismo; conformándose con el parecer del Procurador general de aquella Capital, á fin de que el expresado Durán fuera procesado por los delitos de plagio y robo, que se dice perpetró en los últimos meses del año de 1865.

El Juez de Distrito entonces dispuso en su auto, cabeza de proceso y otras cosas, que se pidieran al Juzgado de 1ª instancia de Tepeji los antecedentes á que se refería el mencionado Procurador general en su dictámen que obra á fojas 10 de la causa principal; que á la Gefatura política de Puebla se le pidiera el exhorto que se le dirigió por el Juez de Huajuapam; y por último, que se examinaran á los CC. Miguel Veyran y demas personas que citase.

Dieron lugar á esas providencias, las constancias que el C. Gobernador de Puebla acompañó á su oficio de consignacion. De ellas aparece que Durán fué juzgado y sentenciado por el Gefe político de Huajuapam, siguiéndose contra él una especie de averiguacion, la que dió por resultado la sentencia que esa autoridad pronunció en 17 de Junio de 1872, segun la que D. Manuel Durán fué absuelto del cargo de plagio cometido en la persona de Miguel Garcia Veyran, y de asalto; y en cuanto á la responsabilidad que pudiera resultarle por las eje-

cuciones que mandó practicar, como Gefe político que fué de Silacoayapan, se consignará al Juez del partido correspondiente. Esta constancia figura en copia simple bajo el número 1, presentada por el mismo Durán, bien que refiriéndose á su original.

Levantada la averiguacion por el Juez de Distrito, y previa orden de que se avisara al superior la iniciacion de la causa, pronunció su auto de formal prision en 19 de Julio de 1872, (fojas 18 del cuaderno principal); á consecuencia de ese auto y por informe del alcalde, apareció complicado en los delitos de Durán, el preso Andres Avelino.

Al avisarse al Tribunal de Cuicuitlan que se habia iniciado causa contra D. Manuel Durán, el secretario de ese Tribunal C. Felipe de J. Almaráz, manifestó bajo declaracion: que siendo secretario del Juzgado de 1ª instancia del Distrito de Tepeji, se instrua averiguacion contra D. Manuel Durán por el plagio cometido en las personas de los Stes. Pacheco y Veyran, apareciendo tambien encausados Andres Avelino y otros que el declarante no recordaba.

Resultado de esa declaracion, y en consideracion á que Durán tenia causa iniciada en el Juzgado de Tepeji, el Juez de Distrito de Puebla se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones que tenia formadas al Juez de Tepeji (fojas 40 del cuaderno principal.)

Revisadas las diligencias por el Juez de Tepeji y partiendo del principio de que en el archivo de su Juzgado no existia constancia alguna de la causa que se decia se instruyó á Durán; y por otra parte el delito por el que en la actualidad está preso es de plagio, declarándose á su vez incompetente, tambien devolvió todo lo actuado al Juez de Distrito de Puebla.

Este, entonces pasó las actuaciones á su Promotor fiscal. Este funcionario, por su pedimento que obra á fojas 44 del cuaderno principal, promovió que se remitieran las actuaciones á la autoridad política, y que el Juez de Distrito se abstuviera de cono-

cer. El Juez no se conformó con ese dictamen y volvió el negocio al Promotor, para que promoviera conforme á derecho, tomando en consideración que ya el Juez se habia inhibido con anterioridad. El Promotor reprodujo su pedimento, aunque procurando apoyarlo con mayor copia de razones. El Juzgado determinó en definitiva remitiera lo actuado al C. Gobernador de Puebla, para que dictaminara lo conveniente (fojas 46 vuelta del cuaderno principal.)

El Gobernador del Estado conformándose con el pedimento de su Procurador general, tuvo por conveniente remitir las actuaciones al Juez de Tepeji. Recibidas por este Juzgado instructor, y con autorización de su superior, la Sala de sentencia se determinó á sostener por fin la competencia para no conocer de la expresada causa contra D. Manuel Durán y Piña y Andres Avelino; á su vez el de Distrito de Puebla hizo lo mismo, y ambas autoridades, no conformándose entre sí, han remitido el negocio á esa Suprema Corte, para que se sirva dirimir el conflicto jurisdiccional que se ha iniciado entre ellos.

Las razones en que el Juez instructor de Tepeji y el de Distrito de Puebla se fundan respectivamente hablando para no conocer de la causa que se ha iniciado contra Durán y socios, son el uno el de Tepeji porque dice que el delito de plagio en la época en que se asegura que Durán lo cometió (Setiembre de 1865) era del resorte de los Tribunales federales, con arreglo á la ley de 11 de Junio de 1861. El Juez de Distrito de Puebla, parte de las leyes de 18 de Mayo de 1871 artículo 39 y 23 del mismo mes y año, las cuales sugetan al conocimiento de las expresadas causas sobre plagio, á las Gefaturas políticas.

Pero en concepto del que suscribe, no es por hoy cuando esa 1.^a Sala debe ocuparse de la decision de ese punto. Con efecto, la resolución del caso ó lo que es lo mismo la decision jurisdiccional de competencia, es hasta cierto punto extemporanea. Los Jue-

ces antes que todo, deben y debieron haber proseguido la sumaria hasta su conclusion y luego debatir sobre su respectiva jurisdiccion. Esto incumbia principalmente al Juez de Distrito del Estado de Puebla que fué á quien primeramente se consignó al reo y le ha tenido en su poder.

Así pues, la causa debe continuar indudablemente su primer estado, á fin de que perfeccionado el juicio informativo que tiene por objeto averiguar la existencia del delito y la persona del deliniente y cuanto conduzca á esclarecer el delito imputado en el proceso, pueda elevarse este, si hay mérito para ello, al segundo estado del juicio á plenario.

Pero como para llegar á ese punto se requiere tiempo y dilacion, máxime atendidas las circunstancias especiales de este asunto, el tiempo y lugar en que se perpetró el delito, los diversos Tribunales á quienes se ha sometido su conocimiento en los años transcurridos, y por otra parte el reo está sufriendo una prisión que promete retardarse bastante segun lo que se deja indicado, el Fiscal cree que en el presente caso los jueces competentes deben obrar con arreglo á la real orden de 27 de Enero de 1789.

Segun esa disposición, y á fin de evitar los daños, molestias y demas gravámenes que sufren los encausados reducidos á prisión, cuando dos ó mas Jueces compiten sobre el conocimiento de esa causa, sin que sea fácil decidir cual de ellos es el competente, se pongan entre sí de acuerdo para que con las seguridades que estimen convenientes den libertad al encausado, y esto sin perjuicio del resultado de la causa. Reservándose al superior, para que en ese preciso particular de dar ó no libertad al reo, y á su modo, dirima cualquiera discordia que ocurra entre ambos Jueces competidores.

El fiscal hace tanto mas mérito de esa resolución, por ser muy conforme al espíritu de nuestra Constitucion política. Esta en su artículo 18, determina que en cualquier estado del proceso en que aparezca

que al encausado no se le puede imponer pena corporal, se le ponga en libertad bajo de fianza; pues bien, cuando de lo actuado quede indeciso ese punto, porque aun todavía se haya perfeccionado el juicio, habiendo por otra parte y por decirlo así extrajudicialmente de los suficientes para imponer esa pena, porque el delito consta de ese modo tambien extrajudicialmente, parece muy natural y muy equitativo, se arbitre algun recurso que consultando á la vez el menor sufrimiento del procesado para el resultado de inocencia, no deje tampoco burlada á la vindicta pública en caso de delincuencia.

La disposicion que el fiscal ha anotado, concilió ambas cosas de una manera satisfactoria, y por lo mismo pide á esa Sala así lo determine. Pudiera decirse que la disposicion citada habla de las competencias afirmativas; pero ya esa Suprema Corte ha determinado en otra vez, fundada en muy buenas razones, que en las competencias negativas deben observarse los mismos trámites que en las competencias afirmativas; y en ese supuesto, es aplicable la resolucion de que se ha hecho mérito.

En las atribuciones de esa Sala está prevenir á los Jueces que ahora han acudido á ella en este negocio, que conformen sus procedimientos á lo determinado en las leyes, y estrañarlos por la irregularidad de sus procedimientos, así como al Promotor fiscal del Estado de Puebla, que fué el que promovió la inhibicion del Juez de Distrito de ese Estado; y que se remitiera lo actuado á la Jefatura política del mismo.

Por lo expuesto el fiscal concluye con las siguientes proposiciones. Primera: Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito del Estado de Puebla, previniéndole obre en ellas con arreglo á derecho y especialmente de conformidad con lo prevenido en la real orden de 27 de Enero de 1789. Segunda: Dígasele cosa igual al de Tepejé para que proceda tambien con arreglo á la citada disposicion. Tercera: Dígase á am-

los Jueces y al Promotor fiscal del Estado de Puebla, que ha llamado la atencion de esa Sala la irregularidad de los procedimientos que se han seguido en este negocio.

México, Diciembre 31 de 1873.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 5 de 1874.—Vista la competencia seguida entre los CC. Jueces de Distrito de Puebla, y de instruccion de Tepejé de la Seda, en el mismo Estado, para no conocer de la causa iniciada contra D. Manuel Durán y Piña y Andres Avelino, por acusacion que contra ellos se ha hecho de los delitos de plagio y homicidio. Vistos los informes respectivos en que cada uno de los Jueces se apoya para no conocer de los expresados delitos; lo pedido por el C. fiscal, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que del delito de plagio de que se acusa á Durán y Piña, segun consta de la certificacin que lo expidió el Gefe político de Huajuapam de Leon, fué absuelto en 16 de Junio de 1872 por el mismo Gefe político que lo juzgó; y por consiguiente, que solos es materia de esta competencia el delito de homicidio de que tambien está acusado. Que segun aparece del mismo certificado, así como de la acusacion, estos delitos se dice fueron cometidos en el Distrito de Silacoayocapan del Estado de Oaxaca, siendo Durán Gefe de una fuerza del Supremo Gobierno. Que en tal caso, el Juez natural que debia juzgar á Durán y Piña y á Andres Avelino, sería el del lugar donde se dice fué cometido este delito. Que tanto las razones en que se apoya el Juez de Distrito como el de instruccion de Tepejé, son arregladas á derecho y no puede por lo mismo declarárseles competentes. Por estas razones y fundamentos, se declara: que es legal el fundamento en que uno y otro se apoyan, pa-

ra declararse incompetente, para conocer de la causa iniciada contra D. Manuel Duran y Piña y Andres Abelino.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito de Puebla, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; copia igual al Juez de Tepeji para los efectos consiguientes.

Así por unanimidad lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José María Iglesias.—Ignacio Ramírez.—M. Auza.—S. Guzman.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Son copias. México, Enero 29 de 1874.
— Enrique Landa secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Manuel Duran y Piña, contra el Gobernador de ese Estado, á disposicion del cual se encuentra preso en la cárcel pública desde hace mas de un año, para ser juzgado como plagiario y homicida

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, evacuando el traslado que previene el auto anterior, ante V. dice: que el preso Manuel Duran Piña, ha solicitado amparo, por llevar mas de un año en la prision que sufre, sin que hasta la fecha tenga Juez que lo juzgue de los delitos de que está acusado; y por que de esos delitos está ya absuelto por sentencia del C. Gefe político de Huajuapam de Leon, que pronunció en la averiguacion respectiva, como se vé del certificado que corre á fojas 9 de este expediente. Dice: que con el hecho de haberse reducido á prision nuevamen-

TOMO V.—PARTE II.

te por esas mismas causas, se han violado en su persona las garantías que le otorgan los artículos 20 y 24 de la Constitución federal.

Al que suscribe no le parece que haya esa violacion de garantías, por que por lo que hace al primer punto, si el procesado aun no tiene Juez, despues del tiempo que lleva de preso, es por la competencia negativa de que habla el informe del Gobierno del Estado, que está pendiente de resolucion ante la Corte Suprema de Justicia, y que debe dirimirla de un dia á otro.

Tal competencia se ha de decidir necesariamente del modo que lo estime el Supremo Tribunal de la Nacion; y entonces el quejoso, sabiendo quien es su Juez, tendrá derecho á hacer valer sus defensas, exigiendo las que le concede el artículo 20 Constitucional. En consecuencia, hasta ahora por la circunstancia de que esté sin Juez, no puede decirse racionalmente que esté violado este artículo en su perjuicio.

Por lo que hace al 2º punto, de que vuelva á ser juzgado por los mismos delitos de que se creó absuelto, debe considerarse en primer lugar: que el Gefe político de Huajuapam, le absolvió única y exclusivamente del de plagio; pero no así de los otros de que está acusado, segun él mismo dice en su escrito de queja; y en segundo lugar, aun cuando el fallo se hubiera, estendido á todos, no debe subsistir respecto al de homicidio, por no haber tenido jurisdiccion para conocer de él.

Que Juez competente haga la averiguacion sobre la verdad ó falsedad de un hecho criminoso, para absolver ó condenar al responsable, está en su obligacion, indirectamente se puede decir que atropella el precepto del artículo 24 de la Constitución, cuando cumple con ella, al sugerir á un reo á su jurisdiccion, que alega estar juzgado.

Esta conducta, lejos de ser contraria al artículo, es muy conforme en su espíritu y letra, pues quiere que nadie sea juzgado dos veces por un mismo delito, pero por au-